

EJECUTORIA de la Suprema Corte de Justicia.

México, Octubre 30 de 1872.—Visto el juicio de amparo promovido ante el Juzgado de Distrito de Morelos, por Gregorio Mena contra el Alcalde Municipal de Jiutepec que lo remitió como reemplazo para servir en el ejército, y considerando que para esa remision no se cumplió con lo dispuesto en la ley de 17 de Mayo de este año, y por lo mismo que se ha atacado en la persona del quejoso la garantía á que se refiere el art. 5º de la Constitución Federal, se decreta que se confirma la sentencia promovida el 9 del presente por el juez de Distrito de Morelos, que declara que la Justicia de la Union ampara y protege á Gregorio Mena contra la providencia del Alcalde Municipal de Jiutepec, que lo envió como reemplazo á Cuernavaca.

Devuélvanse sus actuaciones al Juzgado de Distrito de que preceden con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes: públíquese por los periódicos y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los Sres. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos mexicanos, y firmaron.—*Pedro Ogazon.—J. José de la Garza.—J. M. Arteaga.—P. Ordaz.—Ignacio Ramirez.—J. M. del Castillo Velasco.—M. Auza.—S. Guzman.—Luis Velazquez.—José García Ramirez.—Luis María Aguilar*, secretario.

Es copia. México, Octubre 31 de 1872.—*Dio. Agustín Peralta*, oficial mayor.

AMPARO promovido por el C. José María Arroyo, ante el Juzgado de Distrito de Veracruz, contra providencias del C. Gefe político de Orizaba, que lo violan garantías individuales.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

El Promotor fiscal dice: que el C. José María Arroyo ha intentado este juicio de amparo y proteccion contra providencias dictadas por el C. Gefe político del Canton de Orizaba, que han dado por resultado haber sido filiado en uno de los cuerpos de caballería del ejército, con violacion de las garantías que concede al hombre los arts. 4, 5, 13, 14, 16, 18, y 22 de la Constitución federal.

Pedido el informe correspondiente á la autoridad ejecutora de los actos reclamados lo ha emitido, confesándolos, aunque pretende legalizarlos con las instrucciones que dice haber recibido del C. Gobernador del Estado, copiando en dicho informe una de ellas que es la que considera debia cumplir en el caso, y es relativa á que se aseguren todos los vagos y personas de malos antecedentes para ser consignados, unos y otras, al servicio de las armas en el ejército.

Corrido el traslado correspondiente al que suscribe, advierte que el C. Gefe político de Orizaba ha violado efectivamente las garantías individuales que ha designado el representante del quejoso, interpretando erróneamente la instruccion gubernativa á que se refiere, y arrogándose las atribuciones y facultades que los códigos vigentes del Estado, conceden exclusivamente al poder judicial del mismo.

Y ciertamente la referida instruccion no expresa que la autoridad política juzgue á los vagos y mal entretenidos, sino que se aseguren y se consignen al servicio de las armas, cuya orden es conforme con las prevenciones penales del tít. 26, lib. 2º del Código penal del Estado, cuya aplicacion previo el juicio corres-

pondiente, compete á los tribunales con arreglo al Código de procedimientos; de manera que el C. Gefe político, si consideraba vago y mal entretenido al C. José María Arroyo, ha debido aprehenderlo y ponerlo á disposicion de la autoridad judicial competente, con remision de antecedentes, para que obrando esta conforme á sus facultades, le formara la respectiva causa con los requisitos que establece la Constitucion federal y Código de procedimientos, y le impusiera, si lo merecia, la pena que señala el Código penal; pero no ha sucedido así, como se observa por el contenido explícito del informe y de aquí resulta que la queja del C. Arroyo sea fundada y muy atendible.

Por lo mismo el suscrito Promotor, pide á vd. se sirva ampararlo y protegerlo contra los actos del C. Gefe político de Orizaba que son contrarios á las garantías que el interesado ha designado, y á las leyes vigentes en el Estado, siendo de notar que las facultades extraordinarias y suspension de garantías, solo perjudican, para el efecto de sufrir alguna pena, á los que cometan el delito de rebelion contra las autoridades constituidas.

H. Veracruz, 25 de Marzo de 1872.—
Lic. J. M. López de Escalera.

SENTENCIA del C. juez de Distrito.

Veracruz, Octubre 5 de 1872.—Visto este juicio de proteccion y amparo promovido por el C. José María Arroyo contra providencias dictadas por el C. Gefe político del Canton de Orizaba para que fuese afiliado en uno de los cuerpos de caballería del ejército, con violacion de las garantías que conceden al hombre los arts. 4, 5, 13, 14, 16, 18 y 22 de la Constitucion federal; el informe producido por la autoridad ejecutora de

los actos reclamados en el que á la vez de confesarlos pretende haber procedido con legalidad obediendo instrucciones del C. Gobernador del Estado relativas al aseguramiento de los vagos y personas de malos antecedentes para ser consignados unos y otros al servicio de las armas en el ejército; el pedimento fiscal y todo lo demas que convino tener presente; considerando que la citada autoridad política ejerciendo atribuciones que no le competen sentenció al quejoso á la pena de servir en el ejército, juzgándolo como vago en oposicion de lo que dispone el Código de procedimientos del Estado y art. 21 de la Constitucion federal que solo concede á los jueces y Tribunales la facultad de imponer penas propiamente tales: que por otra parte la instruccion dada al C. Gefe político por el Ejecutivo del Estado en este respecto fué con el objeto de asegurar á los vagos y personas de malos antecedentes como aparece de este informe, pero no para juzgarlos y aplicarles la pena que merecieran con arreglo á las leyes, que por lo tanto resultan violadas en la persona del C. Arroyo las garantías que señalan los artículos relacionados del Pacto fundamental de la República: por cuyos fundamentos y con arreglo á los arts. 101 y 102 de la misma Constitucion y ley de 20 de Enero de 1869, este Juzgado falla:

Primero; la Justicia federal ampara y protege al C. José María Arroyo, vecino de Orizaba, contra las providencias dictadas por el C. Gefe político de aquel Canton en virtud de las cuales fué afiliado en uno de los cuerpos de caballería del ejército.

Segundo; notifíquese este fallo, sáquense las copias que la ley previene para su publicacion en el periódico oficial del Estado y en el Semanario Judicial de la federacion, elevándose los autos á la Suprema Corte de Justicia para su revision. Así lo mandó y firmó el C. juez de Distrito del Estado: lo testifica-

mos.—*Lic. Luis I. Gómez.*—De asistencia.—*José María González.*—*Vicente Simancas.*

Es copia. H. Veracruz, Octubre 7 de 1872.—*Lic. Luis I. Gómez.*—De asistencia.—*José María González.*—*Vicente Simancas.*

EFECTORIA de la Suprema Corte de Justicia.

México, Octubre 28 de 1872.—Visto el juicio de amparo que con fecha 5 de Marzo del corriente año, promovió ante el juez de Distrito del Estado de Veracruz, José María Arroyo, preso en la cárcel de la ciudad de Orizaba, contra providencias del Gefe político del cantón del mismo nombre, en virtud de las cuales el quejoso ha sido afiliado en un cuerpo de caballería del ejército, con violación, según asienta, de las garantías que otorga la Constitución Federal en sus artículos 4, 5, 13, 14, 16, 18 y 22. Visto el informe del Gefe político, responsable de los actos reclamados, confesando estos y explicando que procedió con justificación, porque fué en obediencia de instrucciones del gobierno del Estado, en las que se le previene, que con el mayor empeño asegure los vagos y personas de malos antecedentes, remitiéndolos y consignándolos al servicio de las armas, teniendo el quejoso aquellas circunstancias, como lo prueba el documento á que se refiere. Vistos los pedimentos del Promotor fiscal y las demás constancias de autos:

Considerando que como dice el juez de Distrito en su sentencia, si bien con arreglo á las leyes del Estado é instrucciones del Gobernador del mismo, el Gefe político de Orizaba pudo asegurar á Arroyo, reputándole vago y de malos antecedentes, no pudo consignarlo al

servicio militar por tal razón, pues las facultades de aquella autoridad se reducen en el caso á remitir á la competente el acusado para que esta le sentencie en debida forma; y en atención á que no habiéndose reducido dicho Gefe político al procedimiento referido, el adoptado por él y reclamado por el quejoso, viola en la persona de este la garantía que otorga el art. 16 de la Constitución de la República.

Con apoyo de la ley de 20 de Enero de 1869, se resuelve lo siguiente: Es de confirmarse la sentencia del juez de Distrito del Estado de Veracruz, pronunciada en la ciudad de este nombre á 5 de Octubre presente, en la que declara: que la Justicia de la Unión ampara y protege á José María Arroyo, vecino de Orizaba, contra las providencias dictadas por el C. Gefe político de aquel cantón, en virtud de las cuales fué afiliado en uno de los cuerpos de caballería del ejército.

Devuélvanse las actuaciones al Juzgado de Distrito de que proceden, con testimonio de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos mexicanos y firmaron.—*Pedro Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*José Arteaga.*—*Pedro Ordaz.*—*Ignacio Ramirez.*—*J. M. del Castillo Velasco.*—*M. Auza.*—*Luis Velazquez.*—*José García Ramirez.*—*Luis María Aguilar*, secretario.

Es copia que certifico. México, Noviembre 8 de 1872.—*Lic. Agustín Peralta*, oficial mayor.